

Santos, su legado ambiental

En septiembre de 2017, la National Geographic Society reconoció al presidente Juan Manuel Santos como un "héroe ambiental" y destacó su "indeclinable compromiso" con la protección de los recursos naturales.

Mark Plotkin, director del Amazon Conservation Team, comentó durante la entrega del reconocimiento que Santos era quizá "el líder me-

dioambiental más importante del hemisferio".

Uno de los principales argumentos para dar este respaldo al mandatario colombiano fue que durante su gobierno el área de zonas protegidas en el país creció en más del 100 %: de 13 millones de hectáreas que existían en el 2010, con la declaración de varios parques nacionales esa cifra se expandió a más de 28 millones.



Juan Manuel Santos promovió la ampliación del Parque Chiribiquete.

País

Un reto ambiental

Limpiando las manchas negras de Colombia

La guerra, accidentes imprevistos, empresas que no cumplieron con sus obligaciones dejaron en el país lugares afectados por derrames de hidrocarburos. En el posconflicto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está solucionando esta situación. La recuperación de Pozo Azul se convierte en un símbolo del medio ambiente que contribuye a consolidar el posacuerdo.

REDACCIÓN NACIONAL

Resignación. No les quedó otra alternativa a los habitantes de la vereda Nueva Granada, en Puerto Asís, que acostumbrarse a convivir con un territorio manchado de petróleo. Por más de cuatro décadas, entre la tupida selva que los rodeaba, ocultas entre el verde de las hojas sobresalían manchas negras y oscuras que les recordaban una vieja tragedia. Con el posconflicto, la esperanza ha vuelto.

Hoy las acciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos lideran un cambio en beneficio de las comunidades. Se trata de generar beneficios ambientales y mayor desarrollo social para todos los habitantes de las zonas petroleras como lo ha dispuesto el presidente Juan Manuel Santos, tras firmar el acuerdo de paz.

La historia de Pozo Azul Grande, uno de los pasivos ambientales más emblemáticos de Colombia, se remonta al 3 de enero de 1967, cuando un grupo de ingenieros de la Texas Petroleum Company llegaron hasta Nueva Granada para perforar y comenzar una operación de extracción de hidrocarburos. Las cosas no salieron como esperaban y un mes más tarde, el 6 de febrero, decidieron cerrar el pozo y marcharse.

Lo que ocurrió después no está muy claro para nadie. Según informes oficiales, "terceros" llegaron hasta el pozo para intentar explotarlo por su cuenta. El resultado de la intervención no autorizada fue un derrame de hidrocarburos que dejaría una mancha en toda la vereda.

Medio siglo después de la tragedia ambiental, un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, apoyados por Corpoamazonia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Gran Tierra, viajaron al lugar para evaluar si entre todos podían limpiar el lugar y poner fin a ese "pasivo ambiental".

"Pensamos que era una obligación nuestra ayudar al país a solucionar casos como el de Pozo Azul, especialmente ahora que entramos en una etapa de posconflicto —destaca Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos—. Decidimos comenzar con algunos casos emblemáticos para ensayar pilotos de intervención".

Una iniciativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que rápidamente empezó a rendir frutos. El 5 de octubre de 2017, finalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la empresa Gran Tierra Energy Colombia firmaron un acuerdo de intención para la restauración del área contaminada. Adrián Coral Pantoja, presidente de Gran Tierra Energy Colombia, que asumió el reto, comentó en esa oportunidad que "el desarrollo de nuestras operaciones parte del principio de la sostenibilidad, lo cual implica no sólo cumplir la ley, sino propender por iniciativas que generen bienestar y progreso para las comunidades".

Pozo Azul Grande es tan sólo una muestra de la tragedia ambiental que provoca-



En las últimas cuatro décadas se derramaron cerca de 4'119.667 barriles de hidrocarburos. / Archivo

ron la guerra, la ilegalidad y la irresponsabilidad de algunos actores. Pero, como lo señaló el presidente Juan Manuel Santos al entregar este año el Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente, "ahora uno de los temas más importantes del posconflicto es precisamente cómo reversionamos esa situación y cómo sacamos el dividiendo ambiental a la paz".

La mayor parte de esos pasivos ambientales por hidrocarburos están asociados a la guerra. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el primer ataque contra la infraestructura petrolera ocurrió en el año 1965, cuando el Eln atentó contra un oleoducto de la compañía Cities Services Intercol cerca de Barrancabermeja. A partir de ahí, volar oleoductos o derramar el cargamento de los carrotaques se convirtieron en una práctica habitual entre los grupos armados, en una táctica para debilitar al Estado colombiano.

En un análisis del impacto de la guerra en la industria del petróleo, Luis Fernando Issa, de la Universidad Nueva Granada, señaló que "las compañías dedicadas al transporte de petróleo crudo histórica-



“Ahora uno de los temas más importantes del posconflicto es precisamente cómo reversionamos esa situación y cómo sacamos el dividiendo ambiental a la paz”.

Juan Manuel Santos Presidente de Colombia

» Las acciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos buscan generar beneficios ambientales y mayor desarrollo social para los habitantes de las zonas petroleras.

Este reportaje hace parte de una serie de artículos que serán publicados en conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para contar los retos que enfrenta el sector y las acciones que se están poniendo en marcha con el fin de enfrentar esos desafíos sociales y ambientales.



Recuperar áreas afectadas por derrames de hidrocarburos exige una alta inversión.

“Pozo Azul, en el departamento de Putumayo, es un piloto para demostrar que es posible borrar ese pasado oscuro si existen voluntad y trabajo en equipo”.



Los atentados en cifras

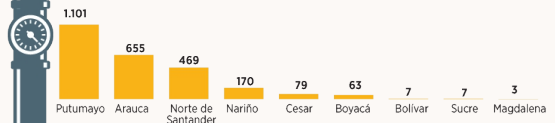
5.655
kilómetros de
oleoductos en
manos de
Ecopetrol

2575
atentados
entre 1986
y 2015

El oleoducto Caño Limón Coveñas fue la estructura más afectada al sumar **1.283** atentados. El segundo lugar lo ocupa el oleoducto de San Miguel-Orito en el Putumayo con **598** atentados.

El departamento del Putumayo sufrió el mayor número de atentados con **1.001** de hechos violentos desde 1986. Arauca con 655 ocupa el segundo lugar y Nariño con **469** el tercero.

Atentados por departamento desde 1986



En 2001 se registró el mayor número de ataques con

253 casos. El año con el menor número de atentados fue 1987, cuando se registraron 11.

Se calcula que por cuenta de todos los atentados se derramaron **4'119.667** barriles de hidrocarburos.

Las reparaciones exigieron una inversión que rondó los **503.859** millones de pesos (cerca de **170** millones de dólares). Una cifra equivalente a la construcción de 50 megacolegios y 5.800 viviendas de interés social.



“Nuestra acción decidida busca seguir liderando la política pública demostrando que es posible la explotación de hidrocarburos con conciencia ambiental y desarrollo para las comunidades”.

Orlando Velandia, presidente de la ANH

mente se vieron golpeadas por grupos terroristas como las Farc y el Eln, con diferentes motivaciones pero que afectaban la operación de las compañías, el medio ambiente donde se presenta el ataque, las comunidades y las finanzas de las compañías”. De hecho, un gran número de los 5.655 kilómetros de oleoductos vinculados con Ecopetrol atraviesan departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, donde históricamente se libró la guerra más intensa.

En una revisión de datos presentada por Ecopetrol, sus oleoductos sufrieron 2.575 atentados hasta el año 2015. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido la estructura más afectada, al concentrar 1.283 atentados. El segundo lugar lo ocupó el oleoducto San Miguel-Orito, en el Putumayo, con 598 atentados. Al clasificar estos atentados por departamentos, la más afectada históricamente fue la infraestructura de Putumayo, con 1.001 hechos violentos; seguido de Arauca con 655 y Nariño con 469, Nariño con 170, Cesar con 79, Boyacá con 63, Bolívar con 7, Sucre con 7 y Magdalena con 3. El 2001 fue el año con más ataques: 253.

Por cuenta de estos hechos violentos, sobre los distintos ecosistemas colombianos se derramaron 4'119.667 barriles de hidrocarburos. Muchos de ellos fueron controlados y retirados de las zonas afectadas con un alto precio para empresas como Ecopetrol, pero muchos otros permanecen ahí como una prueba más de la guerra que experimentó el país.

Ante este panorama, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tomó la decisión de trabajar para revertir esa situación y apoyar a las comunidades que resultaron afectadas. El plan consiste en invertir recursos propios, buscar aliados, ensayar nuevas metodologías, apalancar recursos públicos y privados. Pozo Azul, en el departamento de Putumayo es un piloto para demostrar que es posible borrar ese pasado oscuro si existen voluntad y trabajo en equipo.

En este caso, la fase de planeación y comunicación a la comunidad ya está finalizando. De hecho, en una de las primeras visitas a la vereda, varios líderes locales estaban sorprendidos y no entendían cuál era el interés en reparar el daño hecho después

de tanto tiempo. Tras las primeras conversaciones descubrieron que nadie tenía intenciones ocultas. El único propósito era ayudarlos a recuperar sus ecosistemas, cuerpos de agua y la salud de su territorio. Varios ingenieros y expertos ya están activando la segunda fase, que consiste en un diagnóstico más preciso y la valoración del riesgo y niveles de descontaminación. Todos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos esperan que a partir del próximo año se ejecute la recuperación de la zona y Pozo Azul se convierta en un símbolo de la protección del medio ambiente en una nueva etapa del país como lo es el posconflicto.

“Nuestra acción decidida busca seguir liderando la política pública demostrando que es posible la explotación de hidrocarburos con conciencia ambiental y desarrollo para las comunidades. De lo que se trata es de generar riqueza sostenible para todos. Seguiremos trabajando para que otras instituciones locales, empresas y organizaciones civiles se sumen a esta política de gobierno”, enfatizó Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.